
DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PSOE: UNA LECTURA OPTIMISTA

S. Juliá, L. Paramio, M. Satrústegui



6

Dos años de gobierno socialista, formado a raíz de la mayoría absoluta lograda por el PSOE en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, acontecimiento sin precedentes en la historia de las elecciones libres realizadas hasta el presente en España, es un buen momento para analizar los factores que han hecho posible esta situación así como los compromisos adquiridos y las tareas pendientes.

1. La transición

I.

La transición política de la dictadura a la democracia aparece desde nuestra perspectiva actual como un proceso de ajuste,

de adecuación de las instituciones y aparatos del Estado a las realidades de la nueva estructura económica y la sociedad civil transformada que surgieron en España a consecuencia de la rápida industrialización que caracterizó a la década de los años 60. Este proceso vendría determina-

do de forma sustancial por el marco internacional creado primero por la crisis económica mundial, y después por la creciente tensión entre los bloques que siguió a la invasión soviética de Afganistán y a la decisión de la OTAN de desplegar los euro-misiles.

Tras el plan de estabilización y el período de liberalización de la economía en los años 1959-61 comenzó en nuestro país un acelerado crecimiento económico que duró al menos hasta 1973. La industrialización provocó un fuerte ritmo de urbanización que, junto con una importante emigración al extranjero, modificó sustancialmente la estructura social española, reduciendo de forma drástica la proporción agraria de la población y creando unas nuevas clases medias urbanas. El resultado sería la erosión de la base social con la que la dictadura había contado en los años 50, tras el aplastamiento de obreros y jornaleros en la guerra y la posguerra. A la década de 1970 España llega con una nueva sociedad civil, que ya no responde a los enfrentamientos de la guerra civil pero tampoco respalda a la dictadura. Esta cuenta, a lo más, con el consenso pasivo de esas clases medias que desean vivir en una democracia pero no quieren correr el riesgo implícito en una ruptura del régimen.

Frente a ese consenso puramente pasivo se levanta la nueva clase obrera surgida de la industrialización, cuyas aspiraciones políticas y económicas socavan de continuo la aparente estabilidad del franquismo. Por otra parte, la modificación cultural que conlleva la aparición de las nuevas clases urbanas provoca la absoluta pérdida de legitimidad por parte de la dictadura. El supuesto monopolio político del Movimiento Nacional es a estas alturas pura retórica, y del nacional catolicismo se pasa a una floración de tendencias en el seno de la Iglesia entre las que destacan las corrientes democráticas y populares.

La modificación cultural que conlleva la aparición de las nuevas clases urbanas provoca la absoluta pérdida de legitimidad por parte de la dictadura.

Las profundas desigualdades sociales que son el precio del desarrollo no dejan indiferentes a un buen número de creyentes que apuestan por un nuevo modelo de sociedad o al menos lo intuyen.

Entre las transformaciones sociales provocadas por el desarrollo de los años 50 hay una que afectará de forma decisiva a la sociedad española en la década siguiente: la incorporación masiva de la mujer al trabajo asalariado y a la enseñanza universitaria. El efecto de esta transformación se haría plenamente evidente en la década siguiente, no sólo con la modificación de la estructura familiar, de las relaciones de pareja y de las tendencias demográficas, sino con la generalización de una visión del mundo en la que ya no se da por descontado que el sitio natural de la mujer es la casa y el servicio a un marido. Las mujeres españolas de los años 80 ven el mundo con ojos feministas, incluso si rechazan la etiqueta.

Paralelamente la urbanización provoca la proliferación de subculturas juveniles que son la respuesta de las nuevas generaciones a unas condiciones sociales inesperadas: las ciudades dormitorio y las barriadas industriales. En los años 70, la crisis económica incidirá sobre estas subculturas de una forma compleja y contradictoria: surgirá una masiva cultura marginal, de la droga dura y la delincuencia habitual, pero también formas culturales, en sentido estricto, radicalmente desconectadas de las experiencias culturales de las generaciones anteriores.

II.

Mientras se producen de forma vertiginosa todas estas transformaciones sociales, el régimen, estrechamente ligado a la figura del dictador y su decadencia física, es incapaz de evolucionar al ritmo de la modernización. A la muerte del general

Franco, en 1975, la distancia entre el país real y el país oficial es mayor que nunca. La evidencia de esta distancia llevaría al fracaso de los proyectos continuistas, que no sólo debían enfrentarse a la movilización de los sectores de oposición sino a su falta de credibilidad a los ojos de la inmensa mayoría de los españoles.

A partir de aquí, el éxito de la operación reformista encabezada por el presidente Suárez se explica por la combinación de varios factores. El primero es la conciencia por parte del Rey de la necesidad de salvar el abismo que separa el sistema político heredado de un país sustancialmente moderno y que reclama un régimen democrático. El segundo es la habilidad personal del presidente Suárez para hacer suyo el proyecto de transformación democrática e imponerlo en el seno de las diferentes familias políticas del sistema.

El tercero es el realismo de la oposición, que acepta pactar con los reformistas cuando se hace evidente, tras el referéndum sobre la reforma política, que la inmensa mayoría del país no está dispuesta a asumir los riesgos aparejados por una verdadera ruptura.

No hubo pues ruptura —formación de un gobierno provisional con participación de la oposición—, pero tampoco continuidad: las elecciones de 1977 permitieron la apertura de un período constituyente que a la postre sancionó una verdadera ruptura con el franquismo. El hecho de que la operación viniera impulsada desde el propio aparato político del régimen permitió que la reforma superara los obstáculos que, de otra forma, podrían haber planteado las instituciones en que aquél se había encarnado y los grupos políticos que habían protagonizado su existencia.

El resultado fue un rápido desmantelamiento de las instituciones políticas del Estado franquista, incluyendo el sindicalismo vertical, manteniendo en cambio la

forma de Estado, la monarquía, que había introducido el propio general Franco. De esta forma, sus herederos contrarios a la democracia no estuvieron en condiciones de discutir la legitimidad de la monarquía constitucional y parlamentaria. A su vez, la convergencia en los objetivos democráticos restó todo contenido a la vieja exigencia de la oposición de someter a referéndum la forma de Estado. El proceso constituyente sentó así las bases para un régimen democrático generalmente aceptado y capaz de superar la división de la sociedad española, que había sido durante 40 años la peor herencia de la guerra civil.

En ese proceso constituyente la pluralidad de familias políticas agrupadas tras las siglas de UCD desempeñaron un papel fundamental. La propia carencia de unidad del partido en el gobierno facilitó la

Las elecciones de 1977 permitieron la apertura de un período constituyente que a la postre sancionó una verdadera ruptura con el franquismo.

política de consenso, sin la cual difícilmente se habría llegado a una Constitución generalmente aceptada. A partir de 1978, sin embargo, el fraccionamiento de

UCD comenzó a convertirse en un problema nacional. El partido gobernante, dominado por querellas internas, carecía de la fuerza precisa para afrontar las tareas más graves que el país tenía pendientes: la racionalización y modernización del aparato de Estado, con especial mención de las fuerzas armadas, la construcción del Estado de las autonomías, la reconversión y modernización de nuestra economía, y muy en especial del sector público, en respuesta a la crisis mundial, y la definición de nuestra política exterior, en las difíciles circunstancias creadas por la nueva guerra fría.

La fórmula con la que Suárez dirigió el primer período de la transición —el reparto dosificado del poder entre las distintas familias— condujo en esta segunda etapa al bloqueo de UCD, ya que cada familia empleaba su fuerza en votar aquellas decisiones de las restantes que no entraban en

su propio proyecto político. El resultado sólo podía ser la parálisis del gobierno y el agravamiento de los problemas pendientes. Además, las limitaciones de la base parlamentaria de UCD le imponían en cuestiones fundamentales la búsqueda de pactos con otras fuerzas, lo que contribuyó a agravar las tendencias centrífugas en su seno amén de dar origen a algunos espectáculos poco edificantes.

El gobierno de UCD no fue así capaz de afrontar la reconversión industrial, pero aumentó el déficit público hasta límites que harían casi imposible la instrumentación de contrapartidas cuando llegara la hora de esta reconversión; mantuvo la mala gestión de la empresa pública sin utilizarla como palanca para la modernización del país; conservó la administración heredada y sustituyó una reforma de los aparatos de Estado por una extraña oscilación entre el encontronazo y la debilidad; desencadenó una dinámica autonómica invertebrada que le llevaría al descalabro cuando intentara frenarla en Andalucía; y, al menos en época del presidente Suárez, no llegaría a definir una política exterior coherente, vacilando entre la retórica tercermundista y la debilidad negociadora ante la CEE y Estados Unidos.

El sentimiento generalizado de que la debilidad del ejecutivo ponía en peligro la continuidad de la democracia no pudo aminorar las conspiraciones en el seno de UCD, que llevaron finalmente al presidente Suárez a presentar su dimisión. El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el debate de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente, resumió perfectamente la naturaleza de la amenaza. La democracia superó la prueba gracias a la serenidad de sus representantes, a la disciplina de las fuerzas armadas en su conjunto, y a la rotunda y ejemplar apuesta del Rey por la legalidad democrática. Pero la gravedad del peligro no fue ignorada por nadie.

Un electorado agrupado mayoritariamente en posiciones de centro y de izquierda moderada comenzó a ver en el PSOE la única alternativa posible.

El clima de desencanto que había desatado la parálisis del gobierno centrista en 1979-80 se vio sustituido ahora, ante la debilidad de UCD y el peligro del golpe, por un sentimiento creciente e imparable a favor de un cambio sustancial en el gobierno. Defraudado por UCD, un electorado agrupado mayoritariamente en posiciones de centro y de izquierda moderada comenzó a ver en el PSOE la única alternativa posible de gobierno para la consolidación de la democracia y la modernización del Estado y del país: un gobierno de reformas y dotado de autoridad.

Los posibles competidores del socialismo democrático dentro de la izquierda sufrieron durante estos años a su vez un fuerte desagaste. Mientras la izquierda radical desaparecía, dejando en herencia a los partidos mayoritarios buena parte de sus cuadros, el PCE sufría una profunda conflictividad, consecuencia de la tan aplazada necesidad de renovar su cúpula dirigente. Los enfrentamientos internos, y la evidencia de que sólo el PSOE podía protagonizar un gobierno de cambio, reducirían sustancialmente la militancia y el voto comunista, acentuarían la distancia entre los sectores prosoviéticos y los eurocomunistas, y sumirían en una grave crisis, aún irresuelta, a un partido que había desempeñado un papel fundamental en la resistencia contra la dictadura.

La derecha, por su parte, evaluó equivocadamente la orientación del electorado, considerando a los votantes de UCD como un electorado cautivo al que la disolución del partido centrista permitiría recuperar su lugar natural a la derecha; pero la dura retórica de su máximo dirigente, a menudo lindante con la ambigüedad al referirse al golpismo y a los problemas de orden público y defensa de las libertades, no podía atraer a la inmensa mayor parte de un electorado centrista que ponía su punto de referencia en las modernas democracias europeas. Una parte signifi-

cativa de los votantes de UCD comenzó así a orientarse hacia el PSOE.

El gobierno de Calvo-Sotelo no pudo frenar la erosión del centrismo. La continua imagen de crisis del partido, su impotencia al tratar los problemas sustanciales, y su decisión de entrar en la OTAN sin un debate nacional, sin consenso entre las fuerzas políticas, sin una explicación pública de las razones, sin ningún tipo de contrapartidas o negociación, y, para colmo de males, en un momento de tensión internacional que esta decisión sólo podía contribuir a agravar, provocaron un rápido desgaste de su imagen.

En este contexto el PSOE se presentaba como un partido con un proyecto de reformas —*por el cambio*— y suficientemente maduro y sólido para llevarlo a cabo, especialmente una vez que se hubo su-

perado la crisis interna por la que atravesó en la inevitable búsqueda de una identidad adecuada a las nuevas características de la sociedad española. El mantenimiento de una alternativa de gobierno sin ceder a la tentación de posibles alianzas aumentó la coherencia del partido, que se presentaba además a la sociedad española como una organización política moderna, en el sentido de no ser una acumulación de familias sino un partido formado por cuadros políticos y legitimado por su funcionamiento democrático, plenamente alejado de una organización amiguista o clientelar. La modernidad del partido se reafirmaba, en fin, al representar la confluencia en torno a un programa de distintas clases y sectores populares, lo que debía permitirle gobernar sin sentirse preso de compromisos corporativos o sectoriales. Por otra parte, la implantación en toda España podía ser la garantía de la vertebración del Estado de las autonomías.

La creciente coherencia del PSOE en torno a un programa político de reformas y modernización de la sociedad y del Esta-

do, y en torno a una dirección homogénea y aceptada por todo el partido fue, pues, la doble respuesta que el socialismo ofreció al desolado horizonte de la ruina de UCD y su incapacidad para formular y llevar adelante un programa político. En las elecciones generales, cuya antelación fue la consecuencia inevitable del patente naufragio del centrismo, el PSOE comprometió ante la sociedad española no sólo un programa de gobierno sino, lo que era igualmente importante, la garantía de que, al fin, los españoles contarían con un instrumento político sólido para llevarlo a término. Por todo ello, el PSOE obtuvo el 28 de octubre de 1982 diez millones de votos y la mayoría absoluta en las Cortes.

2. *Balance del gobierno socialista.*

1.

La formación del gobierno socialista

La formación del gobierno socialista demuestra la viabilidad y la eficacia de un proyecto socialista pacífico y lealmente comprometido con la legalidad democrática.

supone en varios aspectos un acontecimiento histórico. Es un hito, en primer lugar, para la trayectoria de la izquierda española, pues demuestra la viabilidad y la

eficacia de un proyecto socialista pacífico y lealmente comprometido con la legalidad democrática. En segundo lugar, el cambio de gobierno representa también un triunfo del régimen constitucional y un paso decisivo en su consolidación, porque el principio de alternancia ha sido respetado y aceptado escrupulosamente por todas las fuerzas políticas y sociales. La estabilidad de la democracia no sólo no ha estado en cuestión, sino que se ha visto fortalecida; de hecho, la consecución de esa estabilidad y seguridad políticas fue uno de los objetivos primordiales de muchos electores que ante la crisis de UCD dieron su voto al PSOE para que dirigiera con firmeza y coherencia la política del Estado.

Por otra parte, la opción del electorado español en 1982 presenta un notable paralelismo con las tomadas casi simultáneamente por los ciudadanos de otros países

del sur de Europa, en los que también se había asistido a un profundo desgaste de las fuerzas de centro-derecha instaladas en el poder. Esa similitud, pese a los indudables rasgos específicos que individualizan la experiencia española, traduce la creciente homogeneidad de nuestra cultura política con las restantes de Europa, en el marco general de la modernización del área meridional del continente.

II.

Entre los muchos y graves desafíos planteados al primer gobierno socialista podemos enumerar las siguientes grandes áreas de problemas:

a) La reforma y modernización de la administración y el aparato de Estado, incluyendo las fuerzas armadas y de seguridad.

b) La construcción del Estado de las autonomías, dando contenido real a un marco jurídico y vertebrando a partir de ellas un auténtico modelo de Estado.

c) La modernización y reconversión de la economía para hacer frente a las nuevas condiciones de la crisis y restablecer la competitividad de nuestra economía en el marco mundial.

d) La lucha contra las desigualdades sociales, más graves y profundas en España que en la mayor parte de los países avanzados, y en particular la lucha contra el deterioro de la sociedad civil producido por las altas y crecientes cifras de paro.

e) La consolidación de la democracia, amenazada tanto por el clima de inseguridad creado por las intentonas golpistas como por la permanente sangría ocasionada por el terrorismo de ETA y otros grupos.

f) La definición de nuestra política exterior, logrando la colaboración y la in-

Hay que valorar positivamente las iniciativas gubernamentales dirigidas a definir un modelo de cooperación entre las Comunidades Autónomas y el gobierno central.

nuestra definición europea y de los condicionamientos creados por la decisión del gobierno anterior de incorporar nuestro país a la OTAN.

Esta serie de desafíos ponían objetivamente a prueba la eficacia decisoria del gobierno socialista, pero su respuesta y la del grupo parlamentario pueden considerarse, en su conjunto, satisfactorias, a la vista de los resultados obtenidos, cuando apenas ha transcurrido la mitad del mandato parlamentario. En efecto, se ha realizado una acción política diversificada y multisectorial, pero mucho más coordinada que en los gobiernos precedentes, gracias a la cohesión del grupo gobernante y a la dirección efectiva del Presidente. A grandes rasgos cabe resaltar, entre los resultados obtenidos, los siguientes:

a) La reforma de la administración ha sido abordada pese a las dificultades y resistencias corporativas. La Ley de Incompatibilidades de los Funcionarios Públicos, y el proyecto de ley de Reforma de la Función Pública, son los primeros pasos, sin duda insuficientes, en el camino emprendido.

Mención aparte merecen las normas de diferente rango que en estos dos años se han aprobado sobre la administración militar, normas que tienden a equipararla con el modelo prevaleciente en las naciones europeas. La reforma del Ministerio de Defensa, y de la plantilla y estructura de mando de las FAS, así como la nueva delimitación de las regiones militares, suponen avances importantes hacia la modernización de nuestro ejército.

b) En la construcción del Estado de las autonomías hay que mencionar el impulso gubernamental a las transferencias a las Comunidades Autónomas, y el es-

tegración en el marco europeo, lo que implica muy especialmente el ingreso en la CEE, y contribuyendo a la distensión y la seguridad internacionales partiendo de

fuerzo del PSOE por consolidar las instituciones autonómicas, tanto en las nacionalidades y regiones donde tiene responsabilidades de gobierno como en aquellas donde se encuentra en la oposición. Asimismo, hay que valorar positivamente las iniciativas gubernamentales dirigidas a definir un modelo de cooperación entre las Comunidades Autónomas y el gobierno central, iniciativas entre las que se incluye la oferta de un *acuerdo institucional* sobre importantes leyes básicas que han de definir el marco administrativo del Estado. Sin embargo, la cooperación y la solidaridad en el seno del Estado de las autonomías no son aún resultados tangibles, y distan especialmente de serlo allí donde los partidos nacionalistas propician un continuo clima de enfrentamiento con el gobierno de la nación como única estrategia del gobierno autónomo.

En el plano de las administraciones locales cabe recordar, junto con la importante labor de gestión municipal desarrollada por el PSOE desde 1979, el proyecto de Ley de Bases del Régimen Local que deberá facilitar la descentralización y la vitalidad de las administraciones municipales, y posibilitar también una legislación autonómica de desarrollo en esta materia.

Conviene además recordar que tanto en este apartado como en el anterior se han debido abordar con premura tareas largamente pendientes (reforma de la administración) o históricamente pospuestas (Estado de las autonomías).

c) Frente a la crisis económica, el principal rasgo de la actuación del gobierno socialista ha sido la honestidad con la que ha asumido una tarea de reconversión industrial sistemáticamente aplazada —por puro oportunismo y por debilidad política— por gobiernos anteriores. Esta política era ya urgente si se quería evitar la tercermundización de nuestra economía, y su continua demora es uno de los

mayores pasivos en el balance de los gobiernos de la transición. La reforma estructural se ha realizado en el marco de una política de ajuste positivo, la única política económica que se ha mostrado capaz de crear las bases para salir de la crisis una vez que se ha comprobado que ésta no es una crisis clásica de demanda insuficiente y que las medidas de reflación en un solo país, como las intentadas por el gobierno socialista francés durante su primer año de gestión, sólo conducían al desastre.

Es evidente, por otra parte, que tal política sólo podía llevarse a cabo contando con la confianza popular y con una capacidad de negociación ante la clase empresarial. Sólo puede pedir sacrificios quien al menos posee credibilidad ante sus interlocutores: el gobierno socialista estaba en esa posición y por ello su política ha estado a la altura de lo que las circunstancias exigían.

Pero hay que señalar la voluntad política que se requería para poner en primer plano los intereses populares a largo plazo, y correr el riesgo de desgaste que implica tomar medidas impopulares a corto plazo. Es cierto que las medidas del gobierno no siempre han sido satisfactoriamente presentadas y explicadas al conjunto de los ciudadanos, y muy en especial a los trabajadores afectados en cada caso, y es posible que las negociaciones con los diversos colectivos se hayan conducido sin suficiente sensibilidad ante sus problemas. Es seguro, en todo caso, que la catastrófica situación heredada ha impedido ofrecer —durante la mayor parte de estos dos años— contrapartidas sustanciales a los trabajadores que han visto congelados o recortados sus salarios reales o cancelados sus puestos de trabajo por la recon-

El gobierno socialista ha asumido con honestidad una tarea de reconversión industrial sistemáticamente aplazada.

versión. Pero, más allá de los errores que se hayan cometido o de las difíciles condiciones en que se ha debido abordar el desafío, lo cierto es que el gobierno socialis-

ta no ha sacrificado los intereses populares y nacionales a medio plazo en aras de una fácil popularidad inmediata.

Los resultados a corto plazo de esta estrategia ya han llevado a la reducción de la inflación, que se espera situar en 1985 en las cifras actuales de inflación de la parte europea de la OCDE, a una rápida expansión de las exportaciones, con un saldo positivo de la balanza de pagos y un incremento de la reserva de divisas que ha posibilitado una política de reducción de los tipos de interés. Existen así en estos momentos condiciones para la reactivación de la inversión y para intentar un cambio de tendencia en el campo del empleo, en el que las verdaderas dimensiones del déficit acumulado por gobiernos anteriores han impedido al gobierno socialista hasta el presente cumplir sus promesas electorales.

Es precisamente en el terreno del déficit público, desmesuradamente incrementado por la política de fáciles concesiones

seguida hasta 1982 por los gobiernos de la transición, donde la estrategia socialista encuentra un grave obstáculo: las dimensiones y la rigidez del déficit no pueden ser reducidos sin graves costes sociales, y ello condena al gobierno a una lenta tarea de contención y recorte selectivo que dilata la llegada de una recuperación efectiva al mantener la escasez de crédito y que, a la vez, restringe las posibilidades de mejora de los servicios sociales y de oferta de contrapartidas a los trabajadores en paro o que ven caer sus ingresos reales. Por ello es más urgente la reducción del déficit de las empresas públicas, una política fiscal progresiva pero que aumente la capacidad recaudatoria del Estado ya en el corto plazo, y una implacable lucha contra el derroche y la ineficiencia en las administraciones del Estado.

d) También en el terreno de la lucha contra las desigualdades ha sido el déficit presupuestario el principal obstáculo. La

escasez de recursos financieros ha llevado a dar prioridad a las medidas de racionalización y reforma que, a corto plazo, permitiesen contener el crecimiento de los gastos o —lo que es mucho más frecuente— permitiesen aumentar la eficiencia de los servicios con un crecimiento moderado del gasto.

El ejemplo más ambicioso es la reestructuración del sistema educativo, cuyas muestras han sido la LODE y la LRU. La primera ha debido chocar contra los intereses particularistas de quienes hacen de la enseñanza un negocio o una empresa de adoctrinación ideológica, pero a la vez pretenden mantenerse con el dinero de todos los españoles a través de las subvenciones del Estado. La segunda se ha enfrentado al corporativismo de los cuerpos docentes tradicionales que ven en la reforma una

amenaza a su control sobre la Universidad, y a las inercias de los sectores menos privilegiados, que han visto en la modernización de la enseñanza superior una

amenaza a su precaria existencia actual, perdiendo de vista las consecuencias a medio plazo de racionalización del sistema. Pero ambas leyes constituyen pasos realistas hacia la modernización de la enseñanza española, la extensión de la igualdad de oportunidades y la creación de una sociedad culturalmente más homogénea y más libre.

También la reforma de la sanidad y de la seguridad social han chocado con los límites financieros impuestos por el déficit presupuestario, pero existe un claro propósito de racionalizar los gastos y elevar la eficacia de unos servicios que son fundamentales para el mantenimiento de la calidad de vida de una amplia mayoría social. El caso de las prestaciones de la seguridad social es quizá el más complejo, pues las modificaciones demográficas van a hacer inevitable la adopción de nuevos sistemas para garantizar la cobertura de las prestaciones sin que el sistema vaya a

El mayor revés del gobierno socialista en sus dos primeros años de gestión ha sido el continuado crecimiento del paro.

amenaza a su control sobre la Universidad, y a las inercias de los sectores menos privilegiados, que han visto en la modernización de la enseñanza superior una

amenaza a su precaria existencia actual, perdiendo de vista las consecuencias a medio plazo de racionalización del sistema. Pero ambas leyes constituyen pasos realistas hacia la modernización de la enseñanza española, la extensión de la igualdad de oportunidades y la creación de una sociedad culturalmente más homogénea y más libre.

También la reforma de la sanidad y de la seguridad social han chocado con los límites financieros impuestos por el déficit presupuestario, pero existe un claro propósito de racionalizar los gastos y elevar la eficacia de unos servicios que son fundamentales para el mantenimiento de la calidad de vida de una amplia mayoría social. El caso de las prestaciones de la seguridad social es quizá el más complejo, pues las modificaciones demográficas van a hacer inevitable la adopción de nuevos sistemas para garantizar la cobertura de las prestaciones sin que el sistema vaya a

la bancarrota. Este es uno de los puntos en que la reforma del actual sistema exige un acuerdo con sindicatos y patronal en un clima de consenso social para la fijación de los grandes objetivos económicos nacionales.

El mayor revés del gobierno socialista en sus dos primeros años de gestión ha sido el continuado crecimiento del paro, más lento pero no por ello menos real que en etapas anteriores. La discrepancia entre las cifras estimadas y las reales del déficit presupuestario vetaron la puesta en práctica de la estrategia prevista en el programa electoral para la creación de puestos de trabajo; la necesidad de afrontar nuevos descalabros financieros, incluyendo muy especialmente el *agujero* del *holding* Rumasa, ha atado las manos al gobierno en el sentido de todo intento de aumentar la inversión pública. En este contexto, la destrucción de puestos de trabajo, inevitable en la primera fase del ajuste a la crisis, ha agravado el problema del paro sin que el gobierno estuviera en condiciones, durante los primeros meses de su gestión, de ofrecer siquiera contrapartidas significativas a los trabajadores.

Al aproximarse la mitad del mandato parlamentario, sin embargo, y habiéndose superado los peores aspectos del choque con la realidad económica, el gobierno ha iniciado una doble respuesta al crecimiento del paro. Por una parte, un programa de fomento del empleo juvenil, potenciando los contratos de formación y en prácticas; por otra parte una considerable extensión de la cobertura del seguro de desempleo, para hacer frente a los casos de trabajadores en paro que ya se aproximan a la edad de retiro y para ampliar la duración del seguro en el conjunto de los trabajadores. Estas medidas, que paliarán los aspectos más graves de la situación actual, son sólo marginales, sin embargo, respecto a la ambición fundamental del gobierno de fomentar la recuperación del

Se ha desarrollado una labor creativa de introducción de legislación y perfeccionamiento de los institutos destinados a asegurar la efectividad de los derechos fundamentales.

empleo potenciando la inversión pública y privada dentro de los límites impuestos por los equilibrios financieros. Si la política económica sigue la trayectoria actual

durante los dos próximos años, cabe esperar que en 1985 el desempleo toque techo en nuestro país y se entre en una etapa de creación neta de empleo.

En todo caso, parece voluntad decidida del gobierno evitar que el problema del paro contribuya a aumentar las desigualdades sociales. La política de racionalización de los servicios públicos y de la seguridad social ha mostrado una clara orientación a elevar el nivel de prestaciones mínimas incluso dentro de los severos límites impuestos por la crisis fiscal del Estado.

e) En la tarea de consolidación de la democracia se han dado en los dos primeros años del gobierno socialista pasos indiscutibles, y que además se reflejan claramente en la opinión pública. Ha desaparecido en este tiempo el temor al involucionismo, ese sentimiento difuso sobre la fragilidad de la democracia que pesó en el ánimo de los españoles a lo largo de la transición. Y el clima de impotencia ante el terrorismo se ha visto sustituido por la conciencia de que ETA, y en general las bandas terroristas, pueden haber entrado ya en una espiral definitiva de retroceso ante la colaboración de los gobiernos español y francés y la acción eficaz y coordinada de las fuerzas de orden público: ya no es la democracia española la que está contra las cuerdas, sino sus enemigos.

Junto a la afirmación de la autoridad estatal frente al involucionismo y el terrorismo se ha desarrollado una labor creativa, constitucionalmente necesaria, de introducción de legislación y perfeccionamiento de los institutos destinados a asegurar la efectividad de los derechos fundamentales. En este terreno hay que subrayar las iniciativas legislativas para garantizar la libertad personal, el derecho de

reunión o la libertad sindical, la despenalización parcial del aborto y la importante modernización de la justicia que es el objetivo del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

f) En política exterior el gobierno ha logrado llegar a la que parece la recta final en las negociaciones para la adhesión de España a la CEE; consciente de la importancia histórica de este proceso, el gobierno no ha caído en apresuramientos ni concesiones oportunistas, tratando de que la integración se realice al ritmo y en las condiciones necesarias para que no resulten desprotegidos los intereses de la economía española.

De todos los vínculos exteriores de nuestro país, el gobierno ha dado peculiar importancia a nuestra proyección en Iberoamérica. El interés que la transición española a la democracia ha provocado en aquellos países, y especialmente en los que han atravesado o están atravesando procesos de recuperación de la democracia, confiere al gobierno una especial responsabilidad. El apoyo a las restauraciones democráticas y a las iniciativas tendentes al establecimiento de la paz y la seguridad de las naciones en Centroamérica ha sido una constante en la política exterior del gobierno socialista, dentro de una preocupación general por los problemas de la paz, el desarrollo y el diálogo Norte/Sur.

Partiendo de un obvio sentido de la responsabilidad institucional, el gobierno socialista ha mantenido congelada la situación de España en la OTAN, evitando que una salida de esta organización por nuestra parte viniera a agudizar los problemas internacionales al ofrecer una imagen de inestabilidad y deterioro en la Alianza occidental, pero sin dejar por ello de contribuir en la medida de lo posible a disminuir las tensiones internacionales, y marcando claramente distancias frente a la carrera armamentista y la nueva guerra

fría. Dentro de una definida estrategia de integración en Europa, de apoyo a las libertades y al modelo de sociedad europeo, el gobierno socialista español no ha dejado ninguna duda sobre su apoyo a la paz y la distensión, incluyendo un abierto apoyo a las gestiones del grupo de Contadora para lograr la paz en Centroamérica.

III.

La oposición al gobierno socialista debe ser también evaluada, reconociendo su respeto por la legalidad constitucional y su lealtad hacia las instituciones democráticas.

La primera fuerza de la oposición, la Coalición Democrática, ha tomado de la derecha francesa una encomiable preocupación por evitar que

Las operaciones centristas son más un síntoma de los límites de la actual derecha parlamentaria que una posible vía para el electorado nacional.

la mayoría socialista en el Congreso ponga en peligro las libertades y la legalidad. Desgraciadamente, la diferente concepción de las libertades

de los dos partidos componentes de la Coalición no ha permitido la explicitación del modelo de sociedad latente en esta preocupación. Por otra parte, la inmoderada afición del Grupo Popular al recurso previo de inconstitucionalidad ha sembrado razonables dudas sobre la voluntad constructiva y la preocupación por el bienestar nacional de una coalición política cuyas acciones parecen destinadas casi exclusivamente a paralizar la actuación del Estado por meros prejuicios ideológicos. En otro sentido, la notoria admiración del señor Fraga por el presidente Reagan y su política no acaba de casar con su más comprensible preocupación por el déficit público español, pues como se sabe la política económica del presidente norteamericano ha conducido a su país al mayor déficit presupuestario (y de la balanza comercial) de su historia. Por todo ello cabe temer que la estrategia legislativa y económica de la principal fuerza de oposición

sea, cuando menos, incoherente, y en el peor de los casos simplemente demagógica.

La conciencia de los límites electorales de la propuesta política del señor Fraga ha llevado a la aparición de una serie de operaciones que intentan recrear el centro político. La *operación Roca* es el caso más notable, pero cabe temer que la escasa credibilidad que Convergencia i Unió ha logrado en lo que se refiere a cuestiones de Estado no beneficia su proyección como plataforma de despegue de un nuevo partido o coalición de centro. Tales operaciones, en realidad, son más un síntoma de los límites de la actual derecha parlamentaria que una posible vía para el electorado nacional. Hoy por hoy, la derecha no consigue recomponerse políticamente en una oferta capaz de llegar al centro del electorado, y no es demasiado previsible que lo logre a corto plazo.

La crisis del PCE no ha terminado: los sectores marginados en la nueva dirección del partido no pierden la esperanza de recuperar peso apoyándose en el ala dura y en los sentimientos prosoviéticos de muchos militantes. Por otra parte, la política de la dirección oscila entre la necesidad de contar con el hecho de que el gobierno es un gobierno de izquierda y la tentación de arrebatarse votos mediante una fácil demagogia basada en el crecimiento del paro y la dura situación económica. La punta de lanza en esta estrategia demagógica es el sindicato de CC.OO., lo que representa un muy grave problema habida cuenta de su peso entre los trabajadores. Pero la demagogia nunca paga a la larga: la carencia de un proyecto económico creíble frente a la crisis, y la negativa a asumir que es preciso pagar un precio por salir de ella, perjudicarán a la credibilidad del PCE incluso si ahora le permiten ganar una cierta popularidad.

El movimiento pacifista y otros movimientos radicales suponen un desafío

No es posible mantener un proyecto socialista a medio plazo si los sectores más politizados y más jóvenes le vuelven la espalda.

real para el gobierno socialista. No es posible mantener un proyecto socialista a medio plazo si los sectores más politizados y más jóvenes le vuelven la espalda.

En particular, es preciso dar una salida al paro juvenil para evitar que una amplia masa de jóvenes caiga en el cinismo político. En cuanto a los problemas de la paz, es más preciso que nunca señalar que la adopción del modelo europeo de sociedad no supone una apuesta por el rearme o por la nueva guerra fría. Pero, en todo caso, es muy poco previsible que el descontento por la política del gobierno socialista pueda llevar a los jóvenes a buscar nuevas opciones políticas: el principal peligro es un renacimiento de la abstención y el desarrollo, que podría suponer un riesgo para la estabilidad de la democracia, o, cuando menos, para la existencia de un gobierno de mayoría capaz de gobernar eficazmente.

3. *Un proyecto nacional y popular*

I.

El espíritu de la campaña electoral que dio al PSOE la mayoría absoluta el 28 de octubre de 1982 fue la apuesta *por el cambio*, entendido como una nueva forma de gobernar y como el comienzo para nuestro país de una etapa distinta, más allá de la sombra de la dictadura y de sus secuelas de miedo, cinismo social y apatía. Por ello el hincapié en la necesidad de acabar con las viejas formas de corrupción y de egoísmo, en la necesidad de crear un proyecto nacional y popular, un proyecto para todos los ciudadanos dispuestos a construir una sociedad desarrollada, más solidaria, más libre y más justa.

En la primera fase de la puesta en práctica de este proyecto, como ya se ha señalado, el gobierno socialista ha debido enfrentarse con una situación que ha limitado drásticamente su capacidad para ofre-

cer resultados espectaculares. Es más, al chocar con la inercia de cinismo y apatía que esta sociedad ha heredado de la dictadura, y que es una carga más profundamente peligrosa que la crisis económica o el terrorismo, el gobierno ha pagado el precio de un indudable desgaste durante sus dos primeros años de gestión. En efecto, ha debido enfrentarse en este tiempo a múltiples intereses sectoriales, procedentes de grupos que en muchos casos dieron en 1982 su voto al socialismo, pero que no habían llegado a asumir el hecho de que el precio de la modernización era un precio que debía ser pagado por todos, que la realización del cambio implicaba un sacrificio nacional, y no sólo el sacrificio *de los otros*. Las respuestas corporativistas de los diferentes colectivos afectados han venido a sumarse a los errores de la política del gobierno para crear una imagen de erosión.

Uno de los principales problemas del gobierno ha sido no saber explicar al país cómo la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo se había hecho sobre la base de una situación económica, cuya gravedad no fue concretamente analizada. La verdadera situación económica que encontró el gobierno socialista era mucho peor de lo que se había hecho creer al país, y en concreto el déficit presupuestario era ya incompatible con cualquier política expansiva y creadora de empleo a corto plazo. Desgraciadamente, la falta de acuerdo sobre los grandes objetivos económicos entre los sindicatos, la patronal y el gobierno durante 1983 y los primeros meses de 1984 ha dado campo a una fácil demagogia que, ignorando la ausencia de políticas económicas alternativas (ausencia que mostró claramente el fracaso de la política expansiva seguida por el gobierno socialista francés en el primer año de su gestión), ha atacado a la política del gobierno proponiendo una política económica carente de rigor. La dura situación real creada por el paro ha ofrecido un excelente caldo de cultivo para este tipo de

La promesa de crear 800.000 puestos de trabajo se hizo sobre la base de una situación económica cuya gravedad no fue correctamente analizada.

demagogia, y las propias expectativas que en su momento creó el programa socialista han acentuado el problema.

En éste como en otros casos la primera misión del PSOE debería ser explicar al país que el precio que los diferentes colectivos han pagado durante estos dos años no ha sido gratuito ni inútil, sino que es precisamente la condición para avanzar hacia la modernización de nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra administración. La política económica de rigor de 1983 y 1984, en particular, ha creado las bases para el imprescindible saneamiento de nuestra estructura productiva. No ha terminado, ni mucho menos, el tiempo de los sacrificios, pero las mejores ya obtenidas permiten ofrecer a los trabajadores algunas de las contrapartidas a las que tienen evidente derecho por ese sacrificio.

En este terreno es imprescindible la acción concertada del gobierno y los sindicatos para aumentar la cobertura de los servicios sociales y, al incentivar la inversión, favorecer la recuperación del empleo.

En esta tarea, sin embargo, se presentan obstáculos que no dependen de la voluntad política del gobierno socialista. El más grave es la cultura política heredada de la dictadura: una cultura marcada por la insolidaridad y el corporativismo, y por un profundo cinismo político que lleva a los actores sociales a rechazar toda actuación del gobierno que lesione sus intereses inmediatos, incluso si el objetivo es un avance para los intereses sociales globales. El problema no es ya que esta resistencia desgaste la imagen de un gobierno progresista ni que dificulte la puesta en práctica de decisiones imprescindibles para el saneamiento de nuestra economía y la puesta a punto de nuestra sociedad. El verdadero problema es que unos agentes sociales dominados por la insolidaridad y la voluntad de defender a toda costa sus ventajas particulares no pueden asumir el deseable protagonismo en la elaboración

de un proyecto nacional para la modernización de nuestro país.

Es preciso hacer hincapié en que vivimos una coyuntura excepcional. Los tradicionales países avanzados están reestructurando con rapidez y decisión sus economías y sus sociedades para hacer frente a las nuevas condiciones en las que previsiblemente se producirá la salida de la actual crisis generalizada. Se requieren nuevas tecnologías y nuevas formas de producción, en especial en todo lo relacionado con la aplicación masiva de la microelectrónica a la industria y los servicios, y a la muy probable expansión de éstos a expensas de aquélla. Los países que no modernicen a tiempo sus economías perderán sus anteriores posiciones en el mercado mundial, y esto perjudicará a *todos* los grupos sociales de estos países, empezando por los trabajadores.

Siendo así las cosas, resulta suicida aferrarse a ventajas particulares cuando lo que está en juego es nuestra capacidad colectiva para sobrevivir como país industrial avanzado. Una línea reivindicativa puramente defensiva, carente de propuestas de futuro, o que hipoteque éste para evitar sacrificios a corto plazo, es a estas alturas una línea irresponsable y demagógica, que de generalizarse hundiría a nuestro país en la decadencia económica. Todos los agentes sociales tienen derecho a exigir al gobierno una explicación clara de sus decisiones, a pedirle que busque el consenso en las grandes decisiones y que proteja en la medida de lo posible sus intereses inmediatos. Pero ningún grupo puede pedir que se conduzca al país al desastre por negarse a realizar sacrificios a corto plazo. Los trabajadores tienen buena memoria, y sabrán diferenciar en el futuro entre quienes ahora se limitan a impulsar reivindicaciones demagógicas y sin porvenir y quienes saben renunciar al corporativismo para dar prioridad a los intereses populares globales, a los intereses

Resulta suicida aferrarse a ventajas particulares cuando lo que está en juego es nuestra capacidad colectiva para sobrevivir como país industrial avanzado.

nacionales. Tarea especialmente ardua cuando no sólo se hereda de la dictadura una cultura insolidaria y corporativista, sino también la proclividad a ejercer el poder con arrogancia, peligro en el que igualmente puede caer un gobierno socialista.

II.

El hecho de que los dos primeros años del gobierno socialista haya sido ante todo tiempo de sacrificios ha contribuido, además, a desdibujar la imagen de su proyecto como proyecto *socialista*. La política económica de rigor, sin embargo, sólo está en contradicción con las tradicionales políticas socialdemócratas de expansión a través del déficit, y nada tiene que ver con el objetivo socialista a medio plazo, que es aumentar el control social sobre las grandes decisiones económicas y democratizar las relaciones de trabajo en el seno de las empresas.

En efecto, para el socialismo democrático la imagen de una sociedad socialista no es la de una economía estatalizada (pues el ejemplo de los países del Este muestra claramente que ese no es el camino) ni la del simple Estado asistencial creado por las socialdemocracias en la posguerra. Ciertamente la ampliación y mejora de los servicios públicos, así como la intervención del Estado para racionalizar la actividad económica, son parte del modelo de una sociedad socialista. Pero la clave de ese modelo es la democratización de la economía, la extensión a la economía de las formas democráticas de control social que los teóricos liberales quieren mantener restringidas al plano de la política.

Esa democratización de la economía pasa al menos por dos vías. Por una parte, por el aumento de la responsabilidad y la información de los trabajadores en la marcha de las empresas, por la democrati-

zación de las relaciones de trabajo. Por otra parte, por el aumento de la responsabilidad y la información del conjunto de la sociedad en la marcha global de la eco-

La ampliación y mejora de los servicios públicos, y la intervención del Estado para racionalizar la actividad económica, son parte del modelo de una sociedad socialista.

nomía, a través de los sindicatos y de las formas políticas de la democracia representativa. En ambos caminos se está lejos de una plena democratización, pero también es fácil ver que las sociedades industrializadas han recorrido ya un largo trecho desde el viejo «despotismo de fábrica» y el Estado gendarme de comienzos de la revolución industrial.

En este sentido, la apuesta por la modernización es una apuesta por el socialismo. Se pretende progresar tanto en lo tocante a las relaciones de trabajo como en lo tocante a la gestión de la economía en su conjunto. El proyecto socialista es un programa de generalización y profundización de la democracia como esencia de las relaciones sociales, y la democracia económica es una parte de él, incluso en momentos como los actuales en los que la necesidad de recuperación económica podría en apariencia relegar a segundo plano cualquier otra preocupación. La potenciación del sindicato socialista, y la promoción de la participación de los trabajadores en la gestión económica, tanto en sus empresas como a nivel global, a través de sindicatos e instituciones políticas, es y debe ser una prioridad política. El mismo protagonismo que se pretende dar a los interlocutores sociales en la fijación de los grandes objetivos económicos es muestra de esta búsqueda del protagonismo de la sociedad en la gestión económica global.

III.

Un partido que se propone ser el portavoz del cambio está obligado a aprender a leer los signos de la calle, a comprender los cambios que se operan ante nuestros ojos. La sociedad española actual no es sólo una sociedad golpeada por la crisis y

desalentada por la austeridad y la falta de resultados palpables de sus sacrificios. Es también una sociedad creativa y profundamente libre, que vive momentos de in-

quietud y renovación cultural sin precedentes. Es la sociedad civil, no el Estado, quien protagoniza este cambio de clima: la mejor alabanza que se puede hacer de la gestión cultural del gobierno socialista es que ha dado terreno de juego a las nuevas tendencias y realidades culturales, como lo han hecho los Ayuntamientos y gobiernos socialistas de las Comunidades Autónomas.

La juventud que apenas conoció la dictadura está desarrollando sus propias formas de ver e interpretar el mundo. Quizá no sean superiores a las que desarrolló la cultura de resistencia que surgió contra el franquismo, pero en todo caso son las suyas y los jóvenes tienen perfecto derecho a exponerlas en pie de igualdad —cuando menos— con las de las generaciones anteriores.

El hecho es que debemos aceptar que vivimos en una sociedad nueva y muy cambiada, y no intentar reducirla a los viejos esquemas familiares. Nuestra realidad es la de una sociedad civil mucho más moderna de lo que dicen las estadísticas económicas, mucho más autónoma y espontánea de lo que cabría haber esperado. La sociedad española cuenta con las energías y recursos necesarios para dar salida a la crisis y fraguarse una nueva identidad colectiva, y la tarea del partido socialista es reconocer y potenciar esas energías y recursos, sin intentar desviarlos o sustituirlos.

En este sentido, nuestra sociedad civil es profundamente europea, mucho más que lo que pueden serlo nuestra administración o nuestra economía. Eso no significa que los españoles pretendan volverse de espaldas a los problemas del Tercer Mundo o que acepten la estrategia de la tensión que ha dado origen a la actual y renovada guerra fría entre el Este y el

Oeste. Significa simplemente que el modelo de sociedad al que pretenden llegar la inmensa mayor parte de los españoles es una democracia industrial avanzada, con menos desigualdades y mayor igualdad de oportunidades que la España actual, pero que conserve y profundice la libertad, la creatividad y la tolerancia que ya caracterizan a nuestra sociedad. Y la referencia de ese tipo de sociedad es Europa.

El proyecto de modernización de nuestro país pasa claramente por una creciente integración, política y económica, en Europa. Bajo la dictadura, el rechazo europeo obligó al régimen a enfeudarse incondicionalmente a la política norteamericana para obtener un mínimo y vergonzante reconocimiento de los países desarrollados. Un componente fundamental de la estrategia socialista debe ser la defensa de una política exterior autónoma, que como un socio más de las comunidades europeas dé a nuestro país, frente al interlocutor norteamericano, la fuerza económica y política de una Europa unida. La integración en la CEE debe ser así tanto una oportunidad de contribuir a la consolidación del proyecto de la unidad europea como la vía para afirmar nuestra autonomía.

En este contexto debe enmarcarse igualmente la política de defensa. Nuestro país debe favorecer todas las tentativas viables de contribuir al restablecimiento y profundización de la distensión, a la reducción de los efectivos convencionales y nucleares en Europa. Pero para ello debe buscar la acción concertada con las democracias europeas, único respaldo capaz de dar a nuestra actuación peso y credibilidad. Por lo demás, mientras dure la actual tensión Este/Oeste nuestro país debe subrayar, *en el marco europeo*, su negativa a cualquier intento de acrecentar la tensión o provocar enfrentamientos ar-

mados globales o regionales, sin ocultar por ello su solidaridad e identificación con las democracias avanzadas de Europa Occidental.

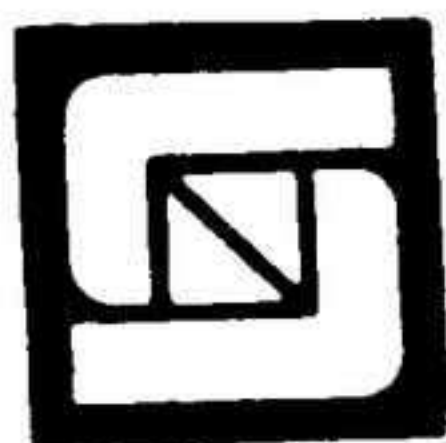
La elección entre pertenecer o no a la OTAN debe serle presentada por el gobierno socialista al país en el marco de esta apuesta general por la modernización de España, que pasa por su integración en Europa subrayando la voluntad del PSOE y del gobierno de contribuir en la medida de lo posible a la distensión y el desarme, así como la compatibilidad de una posible permanencia de nuestro país en la OTAN con la desnuclearización de la Península y la búsqueda de una autonomía real para nuestra política exterior, que debería estar orientada a la conservación de la paz y el restablecimiento de la distensión Este/Oeste, a la creación general de un clima de negociación y desarme, al desarrollo de un proyecto eficaz de colaboración Norte/Sur, y a la afirmación de la solidaridad europea frente a los intereses de las grandes potencias.

Un partido que se propone ser el portavoz del cambio está obligado a aprender a leer los signos de la calle.

Es de especial importancia subrayar que el aislacionismo respecto a Europa es una herencia del franquismo, que encuentra apoyo en el cinismo político que creó la dictadura; y que no tiene nada en común con el movimiento idealista en favor de la neutralidad entre los bloques, como apuesta por el Tercer Mundo, que está en la base del movimiento contra la OTAN. Es ciertamente el pueblo español quien debe decidir la línea de nuestra política exterior, pero para ello es preciso evitar las confusiones entre apuestas políticas diferentes. El PSOE también debe esforzarse por combatir el sentimiento milenarista y desesperanzado que se extiende entre los sectores más politizados y entre buena parte de la juventud: hay que insistir en que existe un futuro para la humanidad, y que el actual clima de rearme y guerra fría no podrá imponerse a la vo-

luntad de los pueblos de crear una sociedad pacífica, unida y libre. La desesperanza es hoy el peor enemigo de la libertad y el socialismo, pues puede llevar a sacrificar

cualquier objetivo moral al puro deseo de garantizar la sobrevivencia, más allá de toda evaluación racional del riesgo y de los fines históricos.



NUEVA SOCIEDAD

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 1984

Nº 74

Director: Alberto Koschuetzke

Jefe de Redacción: Daniel González V.

ANÁLISIS DE COYUNTURA: Oscar Vega López: Bolivia: ¿Qué Hacer en Democracia?; Raimundo Valenzuela de la Fuente: Chile: 11 Años de Estado sin Derecho; Soledad Loeza: México: En Busca del Consenso Perdido.

TEMA CENTRAL: PARTIDOS POLITICOS - PROBLEMAS PRESENTES. Ricardo Núñez: La Realidad Escindida; Eugenio Díaz - Marcela Noé: Partidos Políticos y Sindicatos: ¿Competencia o Solidaridad?; Ernesto Tapia: Capacitación Política y Formación de Cuadros; José Oviedo: La Estabilidad del Equilibrio Inestable; Octavio Rodríguez Araujo: Binomio Perfecto: Gobierno y Partido; Américo Martín: De la Ideología a la Política; Manuel Urriza: ¿Movimiento o Partido?; Raúl Rivadeneira Prada: Partidos Políticos, Partidos Taxi y Partidos Fantasma. (I Parte); Hernando Gómez Buendía: Lo Patológico y lo Democrático del Clientelismo.

POLITICA—ECONOMIA—CULTURA: Trabil Nani - Muchos Problemas. ¿Qué Pasa con los Misquitos?; Gyorgy Kerekes: Experimentar es Vivir. . . El Socialismo en Hungría; Enrique Guinsberg: La Formación del "Hombre Necesario" y los Medios; Federico Fasano: Las Dos Caras de la Censura; Daniel Divinsky: Pequeñas Causas, Grandes Problemas. Algunas Dificultades para Editar la Verdad; La Mujer en la Ciencia; Willy Brandt: Desarrollo, Deuda y Desarme. Los Grandes Retos para la Paz.

NOTICIAS—INFORMES—RECENSIONES

SUSCRIPCIONES (Incluido flete aéreo)

	ANUAL (6 núms.)	BIENAL (12 núms.)
América del Norte/Asia/Europa:	US\$ 25	US\$ 45
Argentina/Brasil/Colombia/ Ecuador/México/Puerto Rico:	US\$ 20	US\$ 35
Venezuela:	Bs. 110	Bs. 200
Resto del mundo:	US\$ 15	US\$ 25

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD.
Dirección: Apartado 61.712-Chacao-Caracas 1060-A - Venezuela.
Rogamos no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones.